

IEQROO/CG/R-021-2021

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO BAJO EL NÚMERO IEQROO/POS/048/2020.**

### **ANTECEDENTES**

**I. APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IEQROO/CG/R-028/2020.** El treinta de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General (en adelante el Consejo General) del Instituto Electoral de Quintana Roo (en adelante Instituto), aprobó en sesión ordinaria, la Resolución IEQROO/CG/R-028/2020, de rubro *"RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA RESPECTO AL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DEL INFORME ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL "FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE"*, en dicha Resolución, entre otras cuestiones, se ordenó lo siguiente:

*"TERCERO. Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Instituto, a efecto de que inicie el Procedimiento Ordinario Sancionador correspondiente, en los términos precisados en la Presente Resolución".*

**II. CONSTANCIA DE REGISTRO.** El quince de diciembre de dos mil veinte, la Dirección Jurídica de este Instituto (en adelante Dirección), en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución referida en el antecedente anterior, y con fundamento en los artículos 65 del Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la Fiscalización a los recursos de las Agrupaciones Políticas Estatales (en adelante Reglamento) y 415 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley Local), inició de manera oficiosa el Procedimiento Ordinario Sancionador en contra de la Agrupación Política Estatal *"Fuerza Social por Quintana Roo"* (en adelante APE) por la vulneración al artículo 398, fracción I, de la Ley Local, consistente en

*"Artículo 398. Constituyen infracciones de la ciudadanía, de los dirigentes, así como personas afiliadas y partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:*

*I. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto Estatal; entregarla en forma incompleta o con datos falsos o fuera de los plazos que señale el requerimiento; respecto de las operaciones mercantiles, dejar de informar sobre los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, las personas aspirantes, personas precandidatas y personas candidatas a cargos de elección popular;"*

En tal sentido, se le asignó el número de expediente IEQROO/POS/048/2020, en dicha constancia se ordenó requerir a la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto lo siguiente:

Sujeto Requerido	Requerimiento	Oficio	Respuesta
Dirección de Partidos Políticos de este Instituto	<p>“1. Los datos de localización (nombre completo, dirección, correo electrónico, etc.) de quien presida o en su caso represente legalmente a la Agrupación Política Estatal “Fuerza por Quintana Roo”</p> <p>2. Copia debidamente certificada de todas las actuaciones a que hace referencia en el DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DEL INFORME ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL “FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO”, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE, así como la Resolución mediante el cual dicho documento jurídico fue aprobado por la Comisión de Partidos Políticos de este Instituto.</p> <p>3. Copia debidamente certificada del expediente formado con motivo del registro de la Agrupación Política Estatal “Fuerza por Quintana Roo”</p>	DJ/506/2020 (notificado el 16 de diciembre de 2020)	Oficio DPP/288/2020 16 de diciembre de 2020
Secretaría Ejecutiva de este Instituto	“...Copia debidamente certificada del expediente formado con motivo del registro de la Agrupación Política Estatal “Fuerza por Quintana Roo...”.	DJ/507/2020 (notificado el 16 de diciembre de 2020)	(SE/223/2020 16 de diciembre de 2020)

**III. ADMISIÓN.** El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite el procedimiento instaurado con motivo de la Resolución referida en el Antecedente I del presente documento jurídico, lo anterior, por la presunta vulneración al artículo 398 fracción I de la Ley Local; el cual establece como infracción la negativa de entregar la información requerida por este Instituto, asimismo, en consecuencia, en términos del artículo 421 de la propia Ley Local, se ordenó emplazar a los ciudadanos **Jorge Mezquita Garma y/o Cesar Augusto Díaz Castillo**, en sus calidades de Presidente y representante legal, respectivamente, para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera de la APE; dicha notificación se efectuó en los siguientes términos:

Sujeto	Fecha de notificación	Vencimiento del plazo	Contestación
Jorge Mezquita Garma	17 de diciembre de 2020, oficio	06 de enero de 2021	No hubo contestación
Cesar Augusto Díaz Castillo	DJ/515/2020		

**IV. DÍAS INHÁBILES.** El día dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se emitió un auto por medio del cual se hizo constar que el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de enero de dos mil veintiuno, serían considerados como inhábiles, lo anterior por corresponder al segundo periodo vacacional de este Instituto, en tal razón el cómputo de los plazos del procedimiento que se resuelve quedó suspendido en el periodo antes precisado.

**V. ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS.** El once de enero de dos mil veintiuno, fueron admitidas las pruebas, recabadas durante la etapa de investigación, en consecuencia, en fecha doce de enero de la propia anualidad, se desahogaron las mismas.

En ese sentido, concluida dicha etapa procesal se ordenó notificar a las partes en el presente expediente para que por vía de **alegatos** manifestaran lo que a su derecho conviniera, dichas notificaciones se efectuaron de conformidad con lo siguiente:

NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN	VENCIMIENTO	CONTESTACIÓN
Cesar Augusto Díaz Castillo	DJ/038/2021	14 de enero de 2021	20 de enero de 2021	20 de enero de 2021
Jorge Mezquita Garma	DJ/037/2021	14 de enero de 2021	20 de enero de 2021	No hubo contestación

**VI. PROYECTO DE RESOLUCIÓN.** El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la Dirección con fundamento en los artículos 423 párrafos primero y segundo de la Ley Local ordenó la elaboración del proyecto de Resolución.

**VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE ESTE INSTITUTO (EN ADELANTE COMISIÓN).** En la sesión celebrada el ocho de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión, rechazó el proyecto por unanimidad de votos de los presentes; la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, Elizabeth Arredondo Gorocica y la Consejera Electoral Thalía Hernández integrante de la propia Comisión, y ordenó la reposición del procedimiento de mérito desde la constancia de registro respectiva.

**VIII. REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO.** En la misma fecha, en cumplimiento a lo ordenado por la Comisión, la Dirección emitió un auto de reposición del procedimiento ordinario respectivo, para conocer sobre las conductas atribuidas a la APE, señaladas en el artículo 398 fracción IV, en correlación con los preceptos 36 párrafo segundo, y 35 fracción V y VI todas las disposiciones de la Ley Local; lo anterior, en razón de que en términos de la Resolución IEQROO/CG/R-028/2020, la APE, no presentó sus comprobantes de gastos, ni realizó ninguna actividad ordinaria y actividades específicas, en el ejercicio dos mil diecinueve; de igual manera que no presentó, conforme a las formalidades establecidas en la normatividad de la materia, el informe anual al que está obligado de conformidad con la Ley local.

**IX. ADMISIÓN.** El diez febrero de dos mil veintiuno, en atención a la reposición se admitió a trámite el procedimiento respectivo, y se tuvo a la APE, como probable responsable de la infracción prevista en el artículo 398 fracción IV, en correlación con los preceptos 36 párrafo segundo, y 35 fracción V y VI todas las disposiciones de la Ley Local; lo anterior, en razón de que en términos de la Resolución IEQROO/CG/R-028/2020, quedó acreditado que la APE, no presentó sus comprobantes de gastos, ni realizó ninguna actividad ordinaria y actividades específicas, en el ejercicio dos mil diecinueve, de igual manera no presentó, conforme a las formalidades establecidas en la normatividad de la materia, el informe anual al que está obligado, en

consecuencia, en términos del artículo 421 de la propia Ley Local, se ordenó emplazar a los ciudadanos **Jorge Mezquita Garma** y **Cesar Augusto Díaz Castillo**, en sus calidades de Presidente y representante legal de la APE, respectivamente, para que manifestaran lo que a sus derechos convinieran; dichas notificaciones se efectuaron en los siguientes términos:

NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN	VENCIMIENTO	CONTESTACIÓN
Cesar Augusto Díaz Castillo	DJ/107/2021	12 de febrero de 2021 (por estrados) <sup>1</sup>	16 de febrero de 2021	16 de febrero de 2021
Jorge Mezquita Garma	DJ/108/2021	13 de febrero de 2021 (por estrados) <sup>2</sup>	17 de febrero de 2021	No hubo contestación

**X. ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS.** El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno fueron admitidas las pruebas y, en consecuencia, en la propia fecha se desahogaron las mismas.

En ese sentido, concluida dicha etapa procesal se ordenó notificar a las partes en el presente expediente para que por vía de **alegatos** manifestaran lo que a su derecho conviniera, dichas notificaciones se efectuaron de conformidad con lo siguiente:

NOMBRE	OFICIO	NOTIFICACIÓN	VENCIMIENTO	CONTESTACIÓN
Cesar Augusto Díaz Castillo	DJ/158/2021	24 de febrero de 2021 (por estrados) <sup>3</sup>	28 de febrero de 2021	No hubo contestación
Jorge Mezquita Garma	DJ/160/2021	20 de febrero de 2021 (por estrados) <sup>4</sup>	24 de febrero de 2021	No hubo contestación

**XI. PROYECTO DE RESOLUCIÓN.** El primero de marzo de dos mil veintiuno, la Dirección con fundamento en los artículos 423 párrafos primero y segundo de la Ley Local ordenó la elaboración del proyecto de Resolución de mérito.

**XII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTE INSTITUTO.** En la sesión celebrada el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión, aprobó el proyecto por unanimidad de votos de los presentes; la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, Elizabeth Arredondo Gorocica, la Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo y el Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech, ambos integrantes de la propia Comisión.

Al tenor de los antecedentes que preceden, y

<sup>1</sup> La notificación respectiva se efectuó mediante cédula fijada en lugar visible del domicilio y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 411 párrafo octavo de la Ley Local, adicionalmente se notificó por estrados de este Instituto.

<sup>2</sup> La notificación respectiva se efectuó por estrados toda vez que en el domicilio proporcionado por la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto no correspondía al domicilio actual del buscado, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 51 del Reglamento de Quejas.

<sup>3</sup> La notificación respectiva se efectuó mediante cédula fijada en lugar visible del domicilio y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 411 párrafo octavo de la Ley Local, adicionalmente se notificó por estrados de este Instituto.

<sup>4</sup> La notificación respectiva se efectuó por estrados toda vez que en el domicilio proporcionado por la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto no correspondía al domicilio actual del buscado, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 51 del Reglamento de Quejas.

## CONSIDERANDO

### PRIMERO. COMPETENCIA.

Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución General) en relación con los artículos 98, numerales 1 y 2, y 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 49, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 120, 123, 125, 140, 141, 157 fracción IX, 423 último párrafo y 424 de la Ley Local, así como los preceptos 79 y 80 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto (en adelante el Reglamento de quejas), el Consejo General es competente para emitir la presente Resolución.

### SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO

**1. PLANTEAMIENTO DEL CASO.** En términos de lo resuelto por este Consejo General mediante Resolución IEQROO/CG/R-028/2020, y de la reposición de procedimiento, la materia del presente procedimiento sancionador consiste en la presunta transgresión a lo establecido en el artículo 398 fracción IV, en correlación con los preceptos 36 párrafo segundo, y 35 fracción V y VI todas las disposiciones de la Ley Local, lo anterior, toda vez que la APE no presentó sus comprobantes de gastos, ni realizó ninguna actividad ordinaria y actividades específicas, en el ejercicio dos mil diecinueve, de igual manera no presentó, conforme a las formalidades establecidas en la normatividad de la materia, el informe anual al que está obligado.

**2. MARCO NORMATIVO.** Previo al análisis del caso concreto, esta autoridad electoral considera pertinente precisar las normas que resultan aplicables en el presente asunto mismo que será dividido en tres apartados:

**a) Informe anual de las Agrupaciones Políticas Estatales (en adelante APES).**

El artículo 33 de la Ley Local establece que las APES están sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido la propia norma, así como en los reglamentos, lineamientos o acuerdos que emita este Instituto.

Por su parte el artículo 36, párrafo segundo de la Ley Local establece que las APES deberán presentar a más tardar en el mes de diciembre de cada año, los comprobantes de los gastos realizados por las agrupaciones políticas con registro, además, deberán de presentar un informe del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. El informe deberá presentarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte al Instituto.

En esa línea, el Reglamento establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora que deberán observar las APES registradas ante este Instituto, para la presentación de los informes sobre el origen y monto de los recursos públicos y privados que reciban, así como su aplicación y registro.

Por su parte, el artículo 53 del Reglamento señala la documentación que deberá ser acompañada junto al informe, entre ellos: los estados de cuenta bancarios y conciliaciones correspondientes al año del ejercicio que se reporte; los documentos de cancelaciones de cuentas bancarias; estados financieros del ejercicio respectivo; balanza de comprobación mensuales; la documentación comprobatoria de ingresos y egresos que se reporta; y las demás que el propio Reglamento señale.

En ese orden de ideas, el artículo 65 de citado Reglamento señala que la Comisión de Partidos Políticos de este Instituto, analizará y aprobará el dictamen sobre el informe de las APES y posteriormente el Consejo General aprobará la Resolución respectiva, situación que aconteció tal y como se establece en el Antecedente I del presente documento jurídico.

#### **b) Comprobación de gastos.**

El artículo 52 del Reglamento, obliga a las APES a presentar un informe con las características señaladas en párrafos anteriores, debiendo contener los ingresos y egresos del ejercicio que se está rindiendo, siendo que el artículo 53 señala como requisito para la presentación de dicho informe, la documentación comprobatoria de ingresos y egresos que se reporta, dicha documentación será revisada por la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto.

Por otra parte, el artículo 36 párrafo segundo de la Ley Local, de igual manera obliga a las APES a presentar además del informe a que están obligados, los comprobantes de gastos realizados en el ejercicio que se reporta.

#### **c) Actividades ordinarias y específicas**

El artículo 31 de la Ley Local, define a las APES como formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

Así, el artículo 36 fracción III, de la Ley Local señala como derecho de las APES el realizar las actividades necesarias para alcanzar sus objetivos políticos y sociales, por otra parte, el Reglamento en su artículo 29 señala que el financiamiento privado de las APES deberá ser destinada a actividades de educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política y tareas editoriales.

Finalmente, el artículo 398, fracción IV de la Ley Local, señala como una infracción, por parte de cualquier persona moral el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en dicha norma, encontrándose a las APES dentro de las personas morales susceptibles de cometer alguna infracción.

**3. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.** Como una cuestión previa, es importante precisar que la vista, materia del presente pronunciamiento deriva de la resolución IEQROO/CG/R-028/2020, emitida por este Consejo General el treinta de noviembre de dos mil veinte, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión del Informe anual de ingresos y gastos de la APE, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve.

En ese contexto, de la Resolución antes precisada se desprende que las irregularidades en las que incurrió la APE, son las siguientes:

- Presentó su informe anual de ingresos de acuerdo a los plazos establecidos, sin embargo, no presentó sus comprobantes de gastos realizados durante el ejercicio dos mil diecinueve.
- No presentó los estados de cuenta bancaria correspondientes a los meses de febrero a diciembre de dos mil diecinueve, ni los estados financieros, las balanzas de comprobación mensuales y anual, así como los auxiliares contables de último nivel.
- Realizó un retiro durante el mes de enero de dos mil diecinueve, por la cantidad de \$44, 740.09 (cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta pesos 09/100), sin embargo, no comprobó ni justificó el egreso y destino del recurso.
- No acreditó la cancelación de la cuenta bancaria.
- No abrió una cuenta bancaria a partir del mes de febrero de dos mil diecinueve, para el manejo de sus recursos.
- No reportó ingresos de sus asociados, por lo que el saldo correspondiente por la cantidad de \$44, 740.09 (cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta pesos 09/100), debió de ser destinado a la realización de sus actividades.
- No reportó ninguna actividad ordinaria ni actividades específicas, en virtud de que en el ejercicio dos mil diecinueve no realizó ninguna de ellas.

**4. EXCEPCIONES Y DEFENSAS.** Dentro de la etapa de emplazamiento y vista de alegatos, la parte denunciada, respecto a las imputaciones que por esta vía se resuelven, refirió en síntesis lo siguiente:

- Que no presentó los estados de cuenta, en razón de que la Institución de crédito CITIBANAMEX, canceló de manera unilateral en el mes de enero de dos mil diecinueve la cuenta de la APE.
- Al cancelarse la cuenta bancaria de la APE, los asociados no pudieron realizar sus depósitos de cuota.

- Al no tener ingresos no tuvo recursos que gestionar, ni tampoco egresos que registrar ni documentación que agregar al informe.
- Señala que en el mes de julio de dos mil diecinueve, la Institución de Crédito CITIBANAMEX, libró a favor de la APE un cheque de caja, por la cantidad que existía en la cuenta de la APE antes del cierre de la cuenta.
- Refiere que no ha sido posible cobrar el citado cheque, pues CITIBANAMEX, condicionó ello a la apertura de una cuenta en dicho Banco.
- La demora de la apertura de la cuenta se debe a que la APE no ha podido reestructurar el Comité Estatal de la APE, pues refiere es un requisito para ello a solicitud del Banco.
- Que no existieron comprobantes de gastos, en razón de que no llevaron a cabo alguna actividad.
- Señala que fueron anexadas las balanzas de comprobación mensuales, la de comprobación anual y auxiliares contables del último nivel.
- No existieron estados de cuenta toda vez que no existía cuenta bancaria de donde pudiera emanar.
- Que por las cuestiones relacionadas con la pandemia no existía persona facultada para presentar la documentación que en su caso se haya omitido.
- Que se carece de una adecuada fundamentación y motivación y violenta los principios de legalidad y certeza que rigen la materia electoral.
- Señala que no hubo un incumplimiento doloso atribuible a la APE, que justifiquen una sanción.
- Que las supuestas omisiones que se atribuyen a la APE, derivaron de actos y hechos fuera del control y voluntad, por lo que no debe sancionarse.

**5. PRUEBAS.** A continuación, se enlistarán y analizarán las pruebas que obran en el expediente, que se resuelve por esta vía, mismas que se describen a continuación

**I. De las ofrecidas por el representante legal de la APE.**

- a) Documental Privada:** Consistente en copia de un oficio de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, signado por el maestro César Díaz Castillo, constante de una foja útil, dirigido a CITIBANAMEX, en el que según su contenido se solicitó la entrega de un saldo de una cuenta bancaria. No se observa algún sello de acuse.
- b) Documental Privada:** Consistente en copia simple del cheque de caja número 5728524, constante de una foja útil, mismo del que se desprende lo siguiente:
  - Pagadero a Fuerza Social por Quintana Roo AC, por la cantidad de \$44, 740.09 (cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta pesos 09/100).
  - La fecha de emisión es del tres de julio de dos mil diecinueve.
  - Es un cheque de caja de la Institución Bancaria CITIBANAMEX.



- c) **Documental Pública:** Consistente en copia certificada de la Resolución IEQROO/CG/R-028-2020. Dicha probanza se desechó toda vez que no fue anexada al escrito de contestación, y tampoco solicitó que se agregara al expediente respectivo, sin embargo, en cumplimiento al artículo 38 del Reglamento de Quejas se hace constar que dicha probanza ya obra dentro del expediente respectivo, al ser una documental emitida por este Instituto.
- d) **Presuncional legal y humana.**
- e) **Instrumental de actuaciones.**

## II. De las recabadas en la etapa de investigación.

Durante la fase de investigación la Dirección obtuvo las siguientes documentales:

- a) **Documental Pública:** Consistente en copia certificada de la Resolución IEQROO/CG/R-028/2020, de rubro *"RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA RESPECTO AL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DEL INFORME ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL "FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE"*.
- b) **Documental Pública:** Consistente en copia certificada del expediente conformado con motivo de la solicitud del informe anual de gastos de la APE, constante ciento treinta y tres fojas útiles.

Respecto de las documentales públicas referidas con antelación, es de precisarse que la correspondiente al inciso b), fue el expediente que se analizó y estudió para generar en segundo momento la Resolución señalada en el inciso a). En ese sentido, dicha Resolución fue aprobada por el Consejo General el treinta de noviembre de dos mil veinte, y no fue impugnada ante el Órgano Jurisdiccional local, en consecuencia, lo ahí determinado quedó firme, para todos los efectos a que hubiera lugar.

De dicha documental se advierte, en lo que es materia para el procedimiento que se resuelve que la APE:

- Presentó su informe anual de ingresos de acuerdo a los plazos establecidos, sin embargo, no presentó sus comprobantes de gastos realizados durante el ejercicio dos mil diecinueve, respecto de la cantidad de \$44, 740.09 (cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta pesos 09/100).
- No presentó los estados de cuenta bancaria correspondientes a los meses de febrero a diciembre de dos mil diecinueve, ni los estados financieros, las balanzas

de comprobación mensuales y anual, así como los auxiliares contables de último nivel.

- No reportó ninguna actividad ordinaria ni actividades específicas, en virtud de que en el ejercicio dos mil diecinueve no realizó ninguna de ellas.

**6. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.** Que precisado lo anterior, se procede a realizar la valoración de los elementos probatorios que obran autos del expediente en que se actúa, conforme a las disposiciones legales de la materia y a la luz de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, a efecto de determinar la existencia o no de los hechos, así como las circunstancias en que se realizaron.

Por cuanto a las pruebas ofrecidas por el representante legal de la APE, las referidas como documentales privadas, conforme a lo dispuesto los artículos 413, párrafo 3, de la Ley Local; 41 y 42 del Reglamento de Quejas; por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán dicho grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. Respecto a la documental pública esta fue desechada, sin embargo, en cumplimiento al artículo 38 del Reglamento de Quejas se hace constar que dicha probanza ya obra dentro del expediente respectivo, al ser una documental emitida por este Instituto.

En ese sentido de las documentales privadas, se desprenden únicamente los indicios de una solicitud de reembolso a la Institución Bancaria CITIBANAMEX y la presunta existencia de un cheque pagadero a favor de la APE, por una cantidad de \$44,740.09 (cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta pesos 09/100 M.N.).

Por otra parte, respecto a las documentales públicas obtenidas durante la fase de investigación al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, aunado a que son certificaciones expedidos por funcionarios electorales en el ejercicio de sus funciones, se consideran de esa manera, de conformidad con lo previsto en los artículos 413, párrafo segundo de la Ley Local; 49, del Reglamento de Quejas; y, por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

**7. DETERMINACIÓN.** Al respecto, conviene reiterar que en la Resolución IEQROO/CG/R-028/2020, este órgano máximo de dirección determinó que las omisiones e irregularidades del informe de egresos no fueron subsanadas por la APE y de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Reglamento, mandató la emisión de la Vista realizada a la Dirección, con el propósito de que, en diverso procedimiento se determinara si, derivado de ello, se vulneraba o no, la normatividad local. En ese sentido, es de señalarse que no se interpuso medio o recurso para controvertir la Resolución referida con antelación, por lo que, en esencia, las consideraciones vertidas en la misma, así como las infracciones acreditadas quedaron firmes y definitivas.

Asimismo, es de precisarse que en fecha ocho de febrero de la presente anualidad, en atención a lo ordenado por la Comisión, se repuso el procedimiento sancionador que nos ocupa para que se determinara si la APE transgredió o no lo establecido en el artículo 398 fracción IV, en correlación con los preceptos 36 párrafo segundo, y 35 fracción V y VI todas las disposiciones de la Ley Local.

Ahora bien, expuesto lo anterior, se tiene que, dentro de las obligaciones de las agrupaciones políticas estatales en materia de fiscalización, se encuentra la de rendir ante este Instituto un informe anual respecto del ejercicio anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 párrafo segundo de la Ley Local, en este contexto, se precisa que las APES son responsables de reportar la totalidad de los gastos que realicen durante los ejercicios sujetos a revisión y que tal reporte se realice de forma oportuna, y en apego a las reglas y formalidades previstas en la Ley Local y el Reglamento. Aunado a lo anterior, el referido precepto legal señala que las APES deberán de presentar los comprobantes que acrediten los gastos del ejercicio que se reporta.

De ahí que, el no presentar el informe se traduce en una omisión de reportar o comprobar gastos, vulnerando directamente los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, ya que, en su caso, este Instituto no pudiera determinar el origen y destino del recurso de dichas agrupaciones. En efecto, la Ley Local no solo obliga a las APES a presentar en determinado tiempo el informe anual de gastos - *a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte al Instituto Estatal* -, sino que de igual manera las obliga a presentarlo en los términos señalados en la propio Ley Local y el Reglamento.

Por lo que una vez establecida la materia respecto del procedimiento instaurado con motivo de las infracciones de la APE, primeramente es importante señalar que, conforme al artículo 14, párrafo 2 de la Constitución General, a nadie se le puede privar de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y se desarrolle conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lo anterior, resulta conforme a lo previsto en la tesis XVII/2005 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro "*PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL*" y que, en esencia, dispone que la presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y el acusado podrá aportar medios probatorios para acreditar su inocencia.

En tal sentido, conforme a las constancias que obran en el expediente que nos ocupa, es dable sostener que en el procedimiento respectivo se respetó la garantía de audiencia de la APE, conforme lo establecido los artículos 421, párrafo primero y 423 párrafo primero de la Ley Local, en relación con los dispuesto en los artículos 72 párrafo tercero y 78 del Reglamento de Quejas, toda vez que tal como lo establece la Ley Local, en los Procedimientos Ordinarios Sancionadores existen las etapas de contestación, presentación de pruebas y posteriormente la de alegatos previo a la elaboración de la Resolución respectiva, lo anterior para que en el caso concreto el

Presidente y el Representante legal de la APE, presentaran las pruebas que consideraran pertinentes y ofrecieran los alegatos respectivos; sin embargo, únicamente se obtuvo la comparecencia del maestro César Augusto Díaz Castillo, en su calidad de representante legal de la APE, en la etapa de presentación de pruebas, siendo que, de acuerdo a la información que obra en autos del expediente motivo de la presente Resolución, únicamente replicó los argumentos vertidos al momento que la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto le solicitó la presentación del informe anual, así como los argumentos cuando presentó la subsanación de las omisiones derivadas del proceso de fiscalización previstas en el Reglamento.

Ahora bien, del derecho de audiencia ofrecido a las partes se tiene que no aportaron pruebas que en su caso desvirtuaran las conductas que se le atribuyen a la APE, pues de las documentales privadas no se desprendió algún elemento que esencialmente restara valor probatorio a lo referido en la Resolución IEQROO/CG/R-028/2020, pues, el representante legal de la APE únicamente se limitó a reiterar que la cuenta bancaria en la que se administraba el recurso de la APE, fue cancelada de manera unilateral por la Institución Bancaria en la que se encontraba aperturada, y que ello trajo como consecuencia lo siguiente:

- No presentar los estados de cuenta
- No tener recursos que gestionar.
- Ante la falta de recursos no llevaron a cabo ninguna actividad.
- No agregar documentación respecto a los egresos respectivos.
- Que no existieran los comprobantes de gastos.

Al respecto, no existe justificación respecto de las omisiones en las que incurrió la APE, máxime que según lo señalado en el Dictamen y por el representante legal, al iniciar el ejercicio dos mil diecinueve contaban con la cantidad de \$44, 740.09 (cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta pesos 09/100), el cual es parte del recurso público entregado por este Instituto en el ejercicio fiscal dos mil diecisiete- teniendo en cuenta que hasta ese año, la autoridad comicial otorgaba financiamiento público a dichas agrupaciones, no obstante derivado de la reforma electoral tal prerrogativa les fue retirada y únicamente pueden recibir financiamiento privado de sus asociados- así, es evidente que se vulneraron los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, pues no existe en este momento alguna cuenta bancaria que contenga la cantidad antes señalada, ni tampoco los comprobantes de gastos correspondientes, de ahí que no es suficiente la alegación manifestada en el sentido de que CITIBANAMEX presuntamente llevó a cabo el cierre unilateral de la cuenta bancaria de la APE, aunado que no aportó prueba idónea que pudiera, en su caso, comprobar el cierre de cuenta de manera unilateral.

Así, se tiene que no presentó prueba idónea que pudiera demostrar en su caso que la cuenta bancaria fue cancelada de manera unilateral, lo cual en su caso no liberaría de las obligaciones en materia de fiscalización que la APE contrajo desde su creación.

Por otra parte, de la comparecencia del representante de la APE se desprende que de acuerdo a lo manifestado, no pudieron aperturar una cuenta bancaria ante la imposibilidad de reestructurar

el Comité Estatal de la APE, pues señala que el presidente dejó la representación de la misma, ahora bien, es menester precisar que lo anterior no exime de las obligaciones respecto del destino y uso de los recursos públicos con los que contaba al iniciar el ejercicio dos mil diecinueve, máxime que tal como lo señalan los artículos 5 y 6 el Reglamento, las APES tienen la obligación de constituir un órgano interno responsable del manejo de los recursos y, ante cualquier cambio o modificación deberá de informarse a la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto en un término de veinte días naturales a partir de que ocurra, lo que en el caso concreto no sucedió, pues de los autos que integran el expediente respectivo y de las pruebas ofrecidas por el representante legal de la APE no se desprendió algún indicio que respaldara su dicho, por lo que se reitera que la modificación del órgano interno, no eximía en su caso, a la APE de las obligaciones respecto del destino y uso de los recursos públicos con los que contaba.

En ese orden de ideas, el representante legal manifestó de manera genérica y vaga una inadecuada fundamentación y motivación del procedimiento que se resuelve, por lo que dicho argumento es evidentemente frívolo, pues no señala cuales son los artículos que no se aplicaron de manera adecuada y mucho menos señala las razones por las que en su caso, se debería de considerar al inadecuada motivación, y contrario a lo aducido, la Dirección atendió los principios de legalidad y certeza que rigen la materia electoral, pues señaló los preceptos atribuidos a la APE y le informó debidamente sobre el proceso iniciado en términos de la Ley Local y Reglamento de Quejas.

En consecuencia, es dable precisar que, si bien la APE presentó en tiempo el informe al que está obligado, lo cierto es que no lo presentó en la forma que establece la normatividad de la materia, pues no agregó los comprobantes de gastos del ejercicio dos mil diecinueve, que exige el artículo 36 párrafo segundo de la Ley Local, siendo que de igual manera no presentó los estados de cuenta de dicho ejercicio que exige el artículo 53 inciso a) del Reglamento, ni la documentación comprobatoria de gastos e ingresos señalados en el inciso k) del artículo antes señalado.

Por lo que, en atención a lo antes expuesto, se tiene que la APE vulneró lo establecido en el artículo 36 párrafo segundo de la Ley Local, mismo que es del tenor literal siguiente:

*"Las agrupaciones políticas con registro, a fin de acreditar los gastos realizados, **deberán presentar a más tardar en el mes de diciembre de cada año los comprobantes de los mismos.** Las agrupaciones políticas con registro, **deberán presentar además, un informe del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.** El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte al Instituto Estatal. Los derechos que les correspondan con motivo de su participación en los procesos electorales, se harán valer por conducto de los representantes del partido con los que hayan celebrado el acuerdo respectivo".*

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que en la Resolución IEQROO/CG/R-028/2020, este Consejo General de igual manera determinó que la APE no realizó ninguna actividad ordinaria y específica, en razón de que en el ejercicio dos mil diecinueve no reportó ninguna de ellas.

En el presente procedimiento el representante legal de la APE al dar contestación al emplazamiento formulado por la Dirección, refirió no haber hecho ninguna actividad en el ejercicio que reportó, pues señaló no haber tenido recursos para ello, en razón de la cancelación unilateral de la cuenta bancaria de la APE, y como ya se indicó únicamente ofreció documentales privadas que no lograron desvirtuar el valor probatorio pleno de las documentales públicas consistentes en la Resolución IEQROO/CG/R-028/2020 y el expediente respectivo, en ese sentido lo contenido en las documentales públicas se tiene como cierto, y su alcance probatorio en pleno.

En ese tenor, quedó demostrado que no hubo actividades reportadas por parte la APE, pues al momento de subsanar las inconsistencias del informe la APE no presentó documentación comprobatoria alguna de gastos para el desarrollo de sus actividades, máxime que el representante legal de dicha agrupación, no acompañó medio de prueba alguno en el presente procedimiento con la cual acreditará haber realizado actividad alguna durante el ejercicio del año dos mil diecinueve. De tal modo que, como consecuencia, es dable concluir que toda vez que la APE tenía la obligación de acreditar la realización de actividad alguna durante el ejercicio dos mil diecinueve, circunstancia que no aconteció, por tanto, queda evidenciado que transgredió la normatividad electoral.

En efecto, toda vez que dichas conductas implican una trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y generó por parte la APE incertidumbre sobre el origen y destino de los recursos públicos con los que contó durante el ejercicio dos mil diecinueve, por lo que este Consejo General determina la **EXISTENCIA** de los hechos atribuidos a la APE, y como consecuencia, debe ser sujeto a la sanción correspondiente.

## 7. SANCIÓN

Una vez establecido lo anterior, lo siguiente es determinar la sanción correspondiente, de conformidad con las disposiciones aplicables, siendo importante señalar que, si bien las conductas que han quedado acreditadas constituyen infracciones a determinadas obligaciones legales de la APE, las cuales dieron origen al procedimiento ordinario sancionador que se resuelve en la presente resolución, y de las cuales en principio pudieran ser acreedoras a la aplicación de alguna de las sanciones previstas en el artículo 406, fracción I de la Ley local, siendo una de ellas y la más alta la pérdida del registro como APE, resulta importante señalar que para el caso particular que se atiende y de acuerdo a la propia normatividad, dichas conductas se encuentran previstas dentro de las causales para la pérdida de las APES contenidas en el multicitado artículo 35 del ordenamiento legal antes mencionado.

En efecto, conforme a las disposiciones antes referidas, se tiene que el efecto de las conductas acreditadas, consistentes en no llevar a cabo ninguna actividad ordinaria o específica en el ejercicio dos mil diecinueve, así como no presentar informes en los términos señalados en la Ley Local y reglamentos, lineamientos o acuerdos emitidos por el Instituto, es la actualización de los

supuestos previstos en las fracciones V y VI del artículo 35 de la Ley local, en los cuales se establece que ambos casos, son causales de la pérdida de registro de la agrupación política.

Razón por la cual, de un análisis sistemático y funcional de las disposiciones que regulan lo correspondiente a las Agrupaciones Políticas Estatales, para el caso de los efectos que derivan de la acreditación de las omisiones atribuibles a la APE, resulta innecesario realizar la graduación de la sanción a imponer, respecto de las conductas acreditadas, en virtud de que la propia Ley local establece expresamente la consecuencia de los supuestos que se actualizan con dichas conductas, siendo que resulta coincidente con una de las sanciones previstas en el apartado correspondiente al régimen sancionador, es decir, que en ambos casos se prevé la pérdida del registro.

Al omitir presentar el Informe anual sobre el origen y aplicación de sus recursos públicos en la forma requerida por la normatividad aplicable, en razón de que no presentó los comprobantes de gastos; estados de cuentas; y la documentación que amparara los ingresos y egresos del ejercicio dos mil diecinueve, la APE vulneró los bienes jurídicos tutelados por el artículo 36 párrafo segundo de la Ley Local, trastocando los principios de certeza, objetividad y transparencia que se busca proteger a través de la rendición de cuentas en materia electoral.

Aunado a que dejó de atender su finalidad de contribuir al desarrollo de la vida democrática y fortalecimiento de la cultura política, así como el de creación de una opinión pública mejor informada, pues en el ejercicio dos mil diecinueve no llevó a cabo actividad alguna, como ha quedado probado en la presente Resolución.

En consecuencia, este Consejo General, determina que en virtud de que la APE no presentó sus comprobantes de gastos, ni realizó ninguna actividad ordinaria y actividades específicas, en el ejercicio dos mil diecinueve, de igual manera no presentó, conforme a las formalidades establecidas en la normatividad de la materia, el informe anual al que está obligado implicó una trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y generó por parte la APE incertidumbre sobre el origen y destino de los recursos públicos con los que contó durante el ejercicio dos mil diecinueve, por lo que es procedente la aplicación de la pena máxima prevista en la Ley Local, respecto a las infracciones cometidas por la APE, consistente en la pérdida de registro como agrupación política, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, fracciones V y VI de la Ley Local, que establecen:

*"Artículo 35. Las Agrupaciones Políticas Estatales perderán su registro por las siguientes causas:*

*I a IV...*

*V. No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca el reglamento;*

*VI. No presentar informes en los términos señalados en la Ley, reglamentos, lineamientos o acuerdos emitidos por el Instituto Estatal, y*

*VII. ..."*

En razón de los argumentos y razonamientos antes planteados se ORDENA LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DE **"FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO"**, COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL, para todos los efectos que conforme a derecho corresponda.

Por consiguiente, en términos del artículo 158 fracciones III, V y VII de la Ley Local, se instruye a la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, para que proceda a cancelar en los Libros respectivos, el registro de la otrora Agrupación Política Estatal "Fuerza Social por Quintana Roo", así como de sus representantes ante este Instituto, y proceda a iniciar las acciones conducentes para liquidación y adjudicación de los bienes y remanentes de la agrupación política estatal antes referida.

No pasa desapercibido para este Consejo General, que en su oportunidad, dentro del procedimiento de liquidación que se entable al efecto, la otrora Agrupación Política Estatal "Fuerza Social por Quintana Roo" deberá enterar el monto de \$44,740.09 (cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta pesos 09/100 M.N.) a que se alude en la presente Resolución, para los efectos conducentes; de no ser el caso, se procederá consecuentemente de conformidad a lo determinado en el procedimiento de liquidación y la normativa aplicable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite la siguiente:

### RESOLUCIÓN

**PRIMERO.** Son existentes las conductas atribuidas a la Agrupación Política Estatal *"Fuerza Social por Quintana Roo"*, por las razones expuestas en la presente Resolución,

**SEGUNDO.** Se ordena la pérdida del registro de *"Fuerza Social Por Quintana Roo"*, como agrupación política estatal, en términos de lo razonado en la presente Resolución.

**TERCERO.** Instrúyase a la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, para que proceda a cancelar en los Libros respectivos el registro de la otrora Agrupación Política Estatal "Fuerza Social por Quintana Roo", así como de sus representantes ante este Instituto, y proceda a iniciar las acciones conducentes para liquidación y adjudicación de los bienes y remanentes de la agrupación política estatal antes referida.

**CUARTO.** Notifíquese personalmente la presente Resolución, por conducto de la Secretaría Ejecutiva al representante legal de la Agrupación Política Estatal *"Fuerza Social Por Quintana Roo"*, para los efectos a que haya lugar.

**QUINTO.** Notifíquese por estrados la presente Resolución, por conducto de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, al Presidente de la Agrupación Política Estatal *"Fuerza Social Por Quintana Roo"*, para los efectos a que haya lugar.



**SEXTO.** Notifíquese la presente Resolución mediante atento oficio, por correo electrónico, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejo General, la Junta General y al Titular del Órgano Interno de Control del Instituto, para los efectos legales conducentes.

**SÉPTIMO.** Publíquese un extracto de la presente Resolución en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 95 numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos.

**OCTAVO.** Archívese, en su oportunidad, el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**NOVENO.** Publíquese y difúndase la presente Resolución en los estrados y en la página oficial de Internet, ambos del Instituto.

**DÉCIMO.** Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina; las consejeras electorales Thalía Hernández Robledo y Elizabeth Arredondo Gorocica; los consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla y Juan César Hernández Cruz, todos del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión ordinaria celebrada el día veintidós del mes de abril del año dos mil veintiuno en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo.

MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA

CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS

SECRETARIA EJECUTIVA